

2. DECLARACION sobre la situación económica y fiscal y la reforma tributaria

La Asociación Argentina de Estudios Fiscales, entidad que desde hace más de treinta años se dedica a la investigación y divulgación de temas fiscales y tributarios, encuentra necesario hacer conocer su opinión acerca de la recientemente sancionada reforma tributaria, con particular referencia al régimen de ahorro obligatorio y todo en relación con las particulares vicisitudes por las que viene atravesando nuestro país.

- 1) En primer lugar considera que la vigencia plena de las normas constitucionales y de la democracia constituye un valor indispensable para la convivencia de los argentinos y el respeto de las leyes y las instituciones, de modo de crear el clima propicio para el desarrollo pleno de todos los órdenes: político, social, económico, cultural, etc.
- 2) Hasta junio del corriente año, la inflación descontrolada estuvo a punto de llevarnos al caos y la disolución, y se constituyó en el principal obstáculo para el logro de tales objetivos. Sin perjuicio de otras de sus causas, debe señalarse que la magnitud, composición y calidad del gasto público en todos los niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal y empresas del Estado) ha tomado dimensiones desmesuradas, en particular si se lo vincula con la cantidad y calidad de los servicios que de ellos se derivan.

Sobre el particular cabe apuntar que, a pesar de los anuncios oficiales, no se advierten signos efectivos de su contención y disminución, salvo los que se derivan de modificaciones en su contabilización o del recorte de los aportes del Tesoro a las empresas del Estado como consecuencia del aumento de las tarifas, lo que si bien constituye un paso positivo en materia de sinceramiento de las cuentas oficiales, deja intacto el fondo del problema.

- 3) La puesta en marcha del denominado "Plan Austral" ha constituido un esfuerzo loable para atacar la inflación autoalimentada, y ha hecho

renacer en los argentinos una cuota de fe en torno a las posibilidades de salir de la crisis recurrente. Sin embargo, no podemos dejar de apuntar tres consideraciones que entendemos importantes:

- a) En lo jurídico-institucional, cabe objetar la falta de participación efectiva del Congreso Nacional —estando en período de sesiones ordinarias— en temas que le son propios. Por más importantes que sean los fines políticos ocasionales y la oportunidad y secreto de las medidas adoptadas, la vigencia y el respeto de las instituciones constitucionales son bienes supremos que no deberían verse afectados.
- b) En lo sustantivo, es necesario advertir que los meros controles de superficie, de cuestionables efectos, son por sí insuficientes en la medida en que no se produzcan cambios estructurales que alienten la inversión efectiva, no se disminuya y racionalice el gasto, y no se restablezca la rentabilidad global de la economía.
- c) El control de la emisión monetaria, con ser una demostración elocuente de la voluntad oficial, no será tampoco suficiente en la medida en que no se remuevan sus causas, y simplemente se la reemplace con el endeudamiento externo o interno.

Por ello reiteramos que el esfuerzo de sincerar las cuentas del gobierno debe acompañarse con una disminución y racionalización del gasto tal como se ha indicado.

- 4) La tardía sanción del presupuesto es otro factor que exterioriza un grado preocupante de indefinición en los planes gubernamentales de fondo, aunque en este sentido debe tenerse por auspiciosos el anuncio formulado en cuanto a que el presupuesto de 1986 será sometido al Congreso antes de finalizar el corriente año.

Asimismo, se señala la conveniencia de someter en tiempo oportuno al Congreso de la Nación la consideración de la cuenta de inversión conforme lo ordena el art. 67, inc. 7) de la Constitución Nacional.

- 5) La expiración conflictiva del régimen de coparticipación federal se inserta en un cuadro de comportamientos anómalos de los fiscos locales, donde la insuficiencia presupuestaria los ha llevado a producir la proliferación y el aumento de tributos de todo orden, de casi imposible cumplimiento, generando altísimas tasas de evasión hasta en los tradicionales impuestos "de padrones" ante la atonía fiscal para ejecutarlos, sea por su falta de estructuras administrativas adecuadas, sea por las connotaciones adversas que se derivarían en el plano social. Parecería que en algunos casos se ha sobrepasado el límite de razonabilidad, como sucede con el incremento desmesurado de

valuaciones fiscales, que llegan a superar y en ocasiones en varias veces, los respectivos valores venales.

- 6) Asimismo, la reforma tributaria recientemente sancionada por el Congreso Nacional nos mueve a las siguientes reflexiones generales:

- a) Desde el punto de vista de la equidad, en general debe aplaudirse la iniciativa de revitalizar la imposición sobre los ingresos. Los lineamientos generales de ciertas figuras adoptadas ahora en el impuesto a las ganancias fueron, en alguna ocasión, propiciadas por esta Asociación.
- b) Sin embargo, advertimos que la oportunidad de su sanción no es la apropiada por encontrarnos en un momento de aguda asfixia económica con casi nula inversión.
- c) El fortalecimiento relativo a la imposición sobre los capitales y patrimonios, y la anunciada implantación de un impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito, aparecen como incompatibles con el necesario programa de estímulo a la inversión productiva —que inexorablemente debe formularse— pues se convertirán en un freno a las iniciativas de inversión y en un incentivo a la fuga de capitales o al consumo dispendioso.

A mero título de ejemplo, cabe decir que los criterios de valuación adoptados, manteniendo la alícuota del 1,5 %, tornará de muy difícil cumplimiento los tributos pretendidos.

- d) La complejidad de algunas figuras sancionadas, los mecanismos de información a poner en marcha, y el incremento del número de sujetos obligados al pago de los impuestos a las ganancias y sobre el patrimonio neto —como consecuencia de la rebaja de los mínimos imposables— exigirán una Administración Tributaria capacitada técnica y humanamente para aplicar con éxito la reforma, minimizando la evasión, a niveles lejanos de sus posibilidades actuales reales, ya que un sistema fiscal con preponderancia de impuestos personales requiere un esfuerzo administrativo de singular envergadura.

- 7) Como recurso de emergencia y complementario a las medidas fiscales comentadas, el régimen de ahorro obligatorio recientemente sancionado constituye un esfuerzo más que el Estado exige a los contribuyentes. No podemos sino compartir las inquietudes y acompañar los propósitos que animaron a encarar finalmente con seriedad el problema del déficit fiscal a través de la generación de recursos genuinos. Para ello, el crédito público es sin duda un instrumento eficaz.

Sin embargo, la figura adoptada en esta ocasión no responde adecuadamente a principios financieros básicos, pues, la norma legal y su reglamentación vulneran, por diversos motivos, la equidad, la irretroactividad y la no confiscatoriedad de las cargas públicas.

Además el régimen constituyen un factor más de desaliento a las actividades productivas del país, justamente en circunstancias en que los esfuerzos de todos —gobierno y particulares— deben estar apuntados a permitir y fomentar (no obstaculizar) la generación de capitales nacionales e internacionales que contribuyan a la reactivación económica de la nación, la cual redundará inmediatamente en progresos en la recaudación y en la disminución del déficit fiscal.

8) Finalmente: si la estructura tributaria consagrada será de difícil cumplimiento por la comunidad, y en definitiva ha de recaer sobre quienes estén inscriptos y cumplen, con la subsistencia de una importante evasión se ahondará, en lugar de mejorar, la inequidad del sistema.

Son preferibles los tributos teóricamente menos justos pero no evadibles a aquellos que se traducen en un sistema presuntamente progresivo sólo en su diseño y no en su cumplimiento efectivo.

La Asociación ha entendido que fijar su posición en forma pública a través de la presente, en circunstancias tan claves para el futuro del país y sus habitantes, constituye una obligación para con la comunidad en el ánimo de sumar los esfuerzos a su alcance como contribución al desarrollo que la República anhela.

Buenos Aires, noviembre de 1985

Dr. Enrique L. Scalone
Secretario

Dr. Angel Schindel
Presidente